

La subcultura de las bajas enemigas
Revista Credencial
Edición 264
Noviembre de 2008

Si bien el fenómeno de la desaparición forzada de jóvenes obedece a una mentalidad asesina por parte de algunos militares, existe un entorno político que propició los 'falsos positivos'.

El asesinato de jóvenes de barrios populares por algunos miembros del Ejército -directamente o en complicidad-, para presentarlos como "bajas enemigas" no es una política institucional ni una mácula que abarque toda la institución castrense, donde la mayoría de sus integrantes aún llevan interiorizado el Código de Honor Militar. Sin embargo, todo induce a pensar que tampoco se trata de "casos aislados" o de una enfermedad que apareció de la noche a la mañana de manera imprevisible.

Es la cruda degradación de un proceso de deterioro ético-moral de unos cuantos miembros del Ejército que encontraron el ropaje para autojustificarse en lo que podemos llamar la "subcultura de las bajas enemigas" como factor primordial de éxito. Subcultura esta que hizo carrera al tiempo en que el conflicto se iba intensificando en medio de una sociedad con un evidente problema de descomposición social.

¿Las causas? En primer lugar hay que señalar sin rodeos la responsabilidad personal de cada uno de los homicidas y sus cómplices, a la cual, es de esperar, llegarán pronto las autoridades judiciales. Pero también existen unos aspectos claves del entorno político que, sin pretender justificar conductas, hay que decirlo, facilitaron progresivamente la ocurrencia del fenómeno.

Entre ellos se destaca la falta de previsión de varias autoridades políticas y militares ante cuya mirada impávida avanzó la descomposición hasta que, al llegar a la degradación, explotó en los medios de comunicación con el correspondiente show promovido por el Presidente al tratar de disminuir el daño a la imagen del gobierno.

Últimos antecedentes

Durante el segundo lustro de los años noventa el país vivió una honda crisis de legitimidad, tanto del Presidente como del régimen político a raíz del 'proceso ocho mil'. Potenciadas por ella y otros factores, las Farc lanzaron la ofensiva militar de mayores características cualitativas en toda la historia del conflicto. Aquella que arrancó con el asalto a la base de Las Delicias, que siguió con los descalabros de La Carpa, San Juanito, Patascoy y El Billar, para solo mencionar los de mayor impacto, y que culminó con la toma de Mitú, primera vez que asaltaban una capital de departamento tratando de inaugurar el paso de la "guerra de movimientos" a la "guerra de posiciones".

Fruto del embate, la guerrilla llegó a tener en sus manos cerca de 450 hombres de la fuerza pública a los que no dudaron en llamar "prisioneros de guerra", lo cual evidenció el poder de las Farc y la desmoralización del Ejército. Tanto así que cuando comenzaba el gobierno Pastrana, el recién nombrado comandante de las Fuerzas Militares, general Fernando Tapias, sintetizó la situación diciéndole a su jefe: "la democracia está en peligro y las Fuerzas Militares en cuidados intensivos".

En paralelo a la ofensiva de las Farc, el gobierno Samper le daba vía libre a las Convivir -impulsadas en Antioquia con especial ahínco por el entonces gobernador Álvaro Uribe Vélez- y los paramilitares, penetrándolas y autojustificando

sus masacres en la debilidad del Estado, también crecían y extendían la "experiencia pacificadora de Urabá" al resto del país, como en el caso de Mapiripán. Todo ocurrió pese a denuncias -inicialmente internas y luego públicas, que en su momento conocieron las autoridades civiles y militares competentes-, de probables vínculos del Comandante de la Brigada 17 con los paramilitares.

Pero las informaciones sobre ese tipo de vínculos -derivados de la subcultura de las "bajas enemigas"- no eran nuevas. Desde años atrás sendas ONG venían denunciando in crescendo tanto los vínculos como las posibles 'desapariciones forzadas', hasta que en el 95 lo hizo por primera vez del Departamento de Estado de los E.U. No obstante, muchas de las autoridades políticas y militares las recibieron con la mirada nublada por la polarización, y en lugar de establecer la verdad que pudieran contener, se limitaron a atribuir las a la "guerra política de las Farc". Y no sancionaron ni corrigieron sino que promovieron la impunidad y el consecuente incremento de esas "alianzas" para mostrar resultados positivos en términos de "bajas enemigas", produciéndole a la vez una profunda herida a la legitimidad del Ejército.

Luego vino el proceso del Caguán en simultánea con el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y la concomitante recuperación de la capacidad de reacción y combate. Pero la extensión de la mancha sobre la legitimidad proveniente del paramilitarismo seguía su curso, autojustificada esta vez en el despliegue mediático de fuerza hecho por las Farc en la zona de distensión, en el incremento de los secuestros y en los asaltos a poblaciones en áreas distintas a aquella.

Y la mirada obnubilada de algunos líderes políticos se mantenía. Un caso emblemático fue el efusivo homenaje en el Hotel Tequendama al "pacificador de Urabá" cuando -presionado por el gobierno de E.U. y no por las Farc, como aseguraban los oferentes, el presidente Pastrana se vio en la

obligación de llamar a calificar servicios al general Rito Alejo del Río.

La descomposición evoluciona hacia la degradación

Con esa subcultura reforzada por las alianzas entre los paramilitares y los miembros del Ejército promotores de ella, arriba al poder el gobierno de la política de Seguridad Democrática, acogida con entusiasmo por la mayoría de los colombianos. Uno de los factores de su éxito han sido los resultados y especialmente la forma en que han sido presentados por las distintas autoridades, en términos de la disminución comparativa de los indicadores de violencia que afectan directamente a la población. Aunque no tan sensible, también en otros períodos hubo disminución de esos índices, pero no se informaban al público en la misma forma sino que se les daba preponderancia a las bajas, capturas, incautaciones, etcétera.

No deja de ser paradójico que la forma de presentar los resultados de la política de seguridad democrática haya ido en contravía de la subcultura de las "bajas enemigas", pero que a la vez ésta haya alcanzado la degradación de asesinar personas para presentar sus cadáveres como "resultados positivos".

Causas probables

No la única, ni quizás la principal, pero ciertamente relevante ha sido el contradictorio estilo del presidente Uribe para liderar la ejecución de su política bandera. En sus incontables intervenciones públicas frente a las tropas y en los consejos comunitarios donde participan comandantes militares, el Presidente -seguramente con el propósito de transmitir energía- ejerce un estilo de exigencia de resultados en el que privilegia más las "bajas enemigas" que la disminución de

la violencia ("la culebra sigue viva", "acábenlos por mi cuenta" etc.). Por esta razón, su política ha sido percibida como más de guerra contra las Farc que de seguridad.

Dicho estilo se ha ejercitado en un contexto en el que, mal que bien, la Ley de Justicia y Paz ha permitido la desmovilización de aquellos paramilitares que habían "ayudado" a obtener "bajas enemigas" y han visto disminuido su poder por el inesperado proceso de la parapolítica. En el que además actúan unas Farc que, con el mito de su invencibilidad borrado por la muerte de varios de sus jefes, buscan desgastar a las tropas mediante la evasión de los combates que permiten obtener "bajas enemigas". Haciendo que para los integrantes de la subcultura de las bajas "el fin del fin" se muestre lejano.

Y el cuadro se completa si a lo anterior sumamos aspectos tales como la política de recompensas, de la cual provino una directiva ministerial que, así se diga lo contrario, le puso precio a la vida humana ("por información que conduzca a la captura o baja de...").

La designación del general Mario Montoya como comandante del Ejército quien le hizo eco y potenció el estilo presidencial antes mencionado. Y el rápido y exponencial crecimiento de la institución castrense, que ha desembocado en el sacrificio de la calidad en aras de la cantidad de hombres incorporados a las filas. Todo un entorno para que aquellos homicidas integrantes de la subcultura de las "bajas enemigas", demostrando la ausencia de anclaje ético y moral, hayan llegado a la degradación ya mencionada.

En esas circunstancias no es de extrañar que la directiva ministerial que pretendió cambiar de tajo la subcultura de las "bajas enemigas", otorgándoles más valor a las desmovilizaciones y capturas, haya chocado con la mentalidad

de aquellos como preámbulo al estallido de los "falsos positivos".

Cómo extraña el país a líderes políticos de la talla de, por ejemplo, Alberto Lleras Camargo, quien consciente de la tendencia a considerar a Colombia un país de cultura violenta, pronunció en 1945 un discurso en la Sociedad de Agricultores de Colombia en el que haciendo gala de sindéresis y previsión dijo: "La palabra imprudente del gobernante, o de la oposición, se vuelve un garrote en el villorrio, un duelo a machete en el camino rural".